



Trabajadores de Alcoa en Avilés (Asturias) y A Coruña (Galicia), ayer en Madrid. / VÍCTOR LEBENA (EFE)

Los trabajadores de Alcoa se manifiestan ante Industria y piden una alternativa al ERE

CELIA LÓPEZ, Madrid
Un millar de personas se concentraron ayer frente al Ministerio de Industria en Madrid para pedir al Gobierno una intervención que frene el cierre de las plantas de A Coruña y Avilés de la multinacional del aluminio Alcoa planteado por la empresa el

pasado 17 de octubre. Según los convocantes, el Gobierno ha realizado anuncios pero sin llegar a concretar medidas que faciliten una salida a un conflicto que puede acabar con el despido de 686 trabajadores. El plazo de negociaciones entre la empresa y los sindicatos acaba el 15 de enero.

Llegados en una veintena de autobuses desde Galicia y Asturias, los manifestantes mostraron pancartas con la frase "Alcoa no se cierra" en castellano y gallego. La concentración transcurrió sin grandes incidentes a pesar de las bengalas que exhibieron los manifestantes, que ocuparon parte del Paseo de la Castellana a la altura del Ministerio de Industria, lo que provocó un momento de tensión con la Policía.

"El objetivo no ha cambiado, y es mantener los puestos de trabajo. Por eso el Gobierno central debe dejar las palabras para pasar a los hechos, estamos en el tiempo de descuento, y con Alcoa o sin ella, la producción de aluminio se debe mantener la actividad en ambas plantas", advirtió el secretario general de CC OO Industria de Asturias, Jenaro

Díaz. Por su parte, el presidente del comité de empresa en la planta de A Coruña, José Manuel López Corbacho, reclamó al Gobierno que sea "valiente" para evitar el cierre de dos importantes factorías para España con casi 700 empleos directos y 2.000 indirectos.

Mientras la movilización transcurría en Madrid, la ministra de Industria, Reyes Maroto, estaba en Almería. Desde allí, pidió a la empresa un cambio de actitud: "Las crisis industriales se pueden solucionar; hay ejemplos de ello y, por eso, pedimos a Alcoa que se replantee el cierre para plantear en la mesa de negociación la reindustrialización y que cese en el bloqueo total de cualquier posible solución".

"Le hemos dicho a Alcoa que demore el ERE unos seis meses, lo que nos permitiría buscar alter-

nativas pero tiene bloqueado un posible acuerdo y si mantiene el bloqueo será responsable de la pérdida de muchos empleos y de la actividad productiva de dos zonas que necesitan esos proyectos", continuó.

Estas palabras de Maroto provocaron la reacción de la empresa estadounidense, que rechazó que su postura fuera de bloqueo. "Estamos dispuestos a estudiar una posible oferta siempre que sea seria, rigurosa y respetuosa con los derechos de los trabajadores, pero tras dos meses y medio no hemos recibido ninguna oferta, y el Gobierno tampoco ha presentado ninguna", argumentó. La siderúrgica añadió que un año abrió un proceso de venta y que, pese a recibir distintas muestras de interés, finalmente no cristizaron en ninguna oferta.

CC OO y UGT exigen que la legislatura no acabe sin un cambio de la reforma laboral

Los sindicatos convocan las primeras protestas para presionar a Sánchez

MANUEL V. GÓMEZ, Madrid
Los sindicatos aumentan su presión sobre Pedro Sánchez para que cambie la reforma laboral. Saben que están ante una buena y difícil oportunidad para que se modifique buena parte de las medidas que puso en marcha el Ejecutivo anterior (la reforma laboral de 2012 y la de 2013) y no la quieren desaprovechar. Por eso van a aumentar su presión en las próximas semanas sobre el gabinete socialista con el objetivo de que "leve al BOE" lo que ha "comprometido" en las conversaciones mantenidas desde septiembre.

"El Gobierno no tiene margen para no abordar la reforma laboral y de pensiones esta legislatura, so pena de perder credibilidad. Pero lo tiene que hacer con una posición inequívoca", señaló ayer Unai Sordo, líder de CC OO al acabar la reunión conjunta que mantuvo la ejecutiva de su organización y la de UGT. "La gente no puede esperar más, y al Gobierno se le ha acabado el tiempo de proponer cosas", apostilló a su lado el secretario general de UGT, Pepe Álvarez.

Para aumentar esa presión, ayer pusieron en marcha un proceso de movilizaciones para los próximos dos meses que cuenta como primera convocatoria estrella con "una gran asamblea" de 10.000 sindicalistas de toda España, que se celebrará en Madrid el próximo 8 de febrero. Este es el primer toque de atención serio que las centrales mayoritarias dan a Pedro Sánchez desde que llegó a La Moncloa.

Ambos sindicatos están muy molestos con el Gobierno de Sánchez. "Llevamos meses negociando modificaciones en la

reforma laboral y de pensiones y es el momento de concretar lo que llevamos tiempo planteando", continuó Álvarez. "Pedimos al Gobierno que no otorgue a la CEOE derecho de veto", defendió Sordo.

La vía que ellos exigen para que eso se lleve adelante es un decreto ley, aunque luego se modifique en el Congreso. "Pensamos que lograr la mayoría parlamentaria suficiente es perfectamente posible", analizó el líder de CC OO, que cree que los nacionalistas catalanes "tendrían difícil situarse junto al PP y Ciudadanos".

Movilización feminista

Las movilizaciones a las que ayer dieron luz verde ambos sindicatos se prolongarán, al menos, hasta el 8 de marzo, cuando las centrales mayoritarias se sumarán a las protestas del Día Internacional de la Mujer con un paro mínimo de dos horas. También contemplan que la convocatoria crezca en sectores feminizados en los que haya más conflicto laboral, han señalado ambos sindicalistas.

Estrinando el argumento de que el Gobierno deje las palabras y pase a los hechos, el líder de UGT añadió: "Desde el 8 de marzo [de 2018] en este país se ha hablado mucho y no se ha hecho casi nada, por no decir nada que en el último año".

Ambos sindicalistas no dejaron pasar la ocasión de atacar a Vox. No llegaron a mencionar al partido ultra, pero sí lamentaron su influencia en el debate público. "Las dos organizaciones vamos a combatir este proceso de involución al que ciertas fuerzas políticas quieren someter a la mujer en este país", advirtió Álvarez.

Bruselas urge a España a eliminar las ventajas fiscales de sus puertos

ÁLVARO SÁNCHEZ, Bruselas
La Comisión Europea reclamó ayer a España e Italia que terminen con el régimen tributario favorable del que disfrutaban sus puertos, exentos del pago del impuesto de sociedades en sus principales fuentes de ingresos: las tasas portuarias y los contratos de concesión. Bruselas cree que esas ventajas son una forma de ayuda de Estado incompatible con las reglas europeas, y llama al Gobier-

no español a acabar con ellas antes de que termine el año. "Con el fin de garantizar una competencia leal en toda la UE, los puertos con beneficios deben tributar de la misma forma que otros operadores económicos, ni más ni menos, advierte la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager.

Las reglas son aún más laxas en el País Vasco, donde los puertos están totalmente exentos de abonar el impuesto de socieda-



Una terminal del puerto de Algeciras (Cádiz). / MARCOS MORENO

des. La Comisión estima que esos beneficios dañan la libre competencia con las infraestructuras de otros países que no reciben el mismo trato y pugnan en

el mismo mercado interno por ganar cuota.

Si España no toma medidas, Bruselas abrirá una investigación para aclarar si las exencio-

nes del impuesto de sociedades en los puertos cumplen las normas comunitarias. En caso contrario, puede exigir que se apliquen los impuestos bajo amenaza de sanciones.

El caso de España no es el único. La Comisión ha pedido este mismo miércoles a Italia que termine con exención total del impuesto de que gozan sus puertos. Y años atrás exigió lo propio a Holanda, Bélgica y Francia. Además, Bruselas está analizando la situación de estos equipamientos en otros países del continente.

Los países de la UE pueden invertir hasta 150 millones en puertos marítimos y hasta 50 millones en puertos interiores sin verificación previa de la Comisión, así como asumir los costes de dragado y vías navegables de acceso.